

LA “ESTRATEGIA” GUBERNAMENTAL DEL “POSCONFLICTO”

Darío González Posso

Bogotá, 3 de julio de 2016

En entrevista concedida a Yamit Amat (EL TIEMPO, edición del 3 de julio de 2016), Rafael Pardo, “Ministro del Posconflicto”, describe las orientaciones básicas de lo que será el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, que saldrá en las próximas semanas¹. Habrá que esperar el mencionado documento para conocer con más detalle la anunciada *estrategia* y analizarla. Sin embargo, por lo que dice Pardo, se puede confirmar que el “posconflicto” como lo conciben las élites gobernantes de Colombia, viene cargado de violencias. Su esencia es la reafirmación del modelo económico imperante, apuntalado desde las políticas del gobierno:

- La “estrategia del posconflicto” –anuncia-. estará focalizada en 350 municipios (de los 1.123 que tiene el país), aquellos vinculados más directamente con la guerra. Así, la invocada “Paz Territorial” no se concibe para todo el país. Todo indica que está dirigida esencialmente a recuperar el “control” del Estado sobre los territorios; para convertir el “posconflicto” simplemente en una oportunidad para la ampliación de los grandes negocios.
- Comprende tal estrategia, en los municipios focalizados, un conjunto de “proyectos” y, en especial, la presencia de la fuerza pública. Dice Pardo: “Un dispositivo muy amplio de Fuerza Pública va a copar los municipios donde dejarán de estar las Farc, y lo que llamamos una “estrategia de respuesta rápida”, que es un programa de acciones inmediatas del Gobierno: justicia alternativa, fortalecimiento de juntas comunales en contratación de mantenimiento de vías, focalización de reparación individual a víctimas de las Farc, apoyo a producción agropecuaria. Son más de 1.200 proyectos. En 350 municipios, por ejemplo, se inicia ya un programa de microcrédito tanto del Banco Agrario como de una alianza de bancos privados”.
- No hace ninguna mención a la protección de las economías familiares campesinas, indígenas y de afrodescendientes (podrían estar incluidas en los “microcréditos”, quizás, pero para saberlo será necesario conocer el detalle de la “estrategia”). Está claro que una de las opciones básicas en este “modelo” para el ámbito rural es el fomento de la *agroindustria*, mediante “estímulos fiscales” para que invierta en las zonas focalizadas: “Beneficios para que empresas no presentes en esas zonas se localicen en sitios en los cuales se requiere que haya empresa privada, productiva, agroindustrial. Estamos planteando reducción de impuestos por un determinado tiempo para las empresas que se creen”. Pero esta no es una “reforma fiscal”, advierte Pardo.

Si esta estrategia se confirma, como es de esperar, no serán –por ejemplo-, los campesinos productores de palma de coco en el Pacífico Sur (y en otros lugares) los destinatarios fundamentales de tales “beneficios”, sino en primer término, y de pronto con exclusividad, las empresas agroindustriales palmicultoras y productoras de aceite, ojalá para biocombustibles; pues tales

¹ Véase: <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/entrevista-con-rafael-pardo-ministro-para-el-posconflicto/16635685>

empresas (como en la política de “agro ingreso seguro” de Uribe) son las que, según los principios del “modelo económico” dominante, tienen capacidad para generar “empleo” y por lo tanto progreso económico en las regiones.

Tales empresas serán las mayores beneficiarias de los créditos y podrán pagar sus impuestos “con obras”; por ejemplo, con la construcción de un puente, o de una “vía terciaria”; seguramente trazada por donde mejor convenga a sus negocios particulares y secundariamente para alguna comunidad campesina, si presiona.

Tampoco hay en las declaraciones de Pardo alguna mención a los planes y a las autonomías territoriales de campesinos, indígenas y afrodescendientes. La “Paz Territorial” en esta concepción difícilmente las puede comprender. Seguramente estorban al “modelo económico” (innegociable), tanto para los proyectos de las grandes inversiones agroindustriales, como para las “locomotoras” del “desarrollo”: la gran minería y la extracción petrolera, como ya hemos visto, aunque Pardo no las menciona en esta entrevista.

En suma, más de lo mismo. Acompañado con más presencia de la Fuerza Pública. Más represión y criminalización de las protestas sociales: el martes 28 de junio de 2016, en una ceremonia de ascensos de la Policía, el Presidente Juan Manuel Santos afirmó que ahora se requiere mucho más el SMAD, cuerpo de la Policía, porque, según él, habrán “más movilizaciones y protestas” en el posconflicto...

El “posconflicto”, pues, viene violento. Violento contra la movilización y la protesta social. La “Paz Territorial”, como está concebida por las élites gobernantes, es opuesta a la *construcción de la paz* desde los territorios, por parte de las comunidades, los pobladores campesinos, indígenas y afrodescendientes. Son estorbos figuras como la “Consulta previa”, la Jurisdicción Especial indígena; autonomías, como las Zonas de Reserva Campesina, que no dejarán extender o prosperar; entes territoriales indígenas y resguardos, Consejos Comunitarios de afrodescendientes; posibles asociaciones de municipios o provincias, fundadas en principios como las identidades culturales, la soberanía alimentaria, la protección de las economías campesinas y la creación de pactos regionales para el fortalecimiento de mercados internos regionales de alimentos y el fortalecimiento sobre esta base de las relaciones urbano – rurales.

Así se incrementan las condiciones para mayor empobrecimiento de las poblaciones, desplazamiento y desempleo. La “estrategia” anunciada hace parte del “modelo económico” que las élites gobernantes defienden con uñas y dientes como innegociable, intocable y sagrado. No es de esperar el cambio de tal “modelo” como una concesión graciosa. Por lo pronto vendrán, sin duda, como lo prevé el mismo presidente Santos, “más movilizaciones y protestas”.